

Torturas por «fracaso de liderazgo»

El informe que el general Taguba presentó ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de los EE UU denunciaba que, entre octubre y diciembre de 2003, hubo numerosos casos de «abusos criminales sádicos, descarados e injustificados» en la prisión bagdadí de Abu Ghraib, controlada por el Ejército norteamericano. Y avanzaba que tal serie de crímenes tenían su explicación fundamentalmente en «un fracaso de liderazgo» (además de en la «falta de disciplina y preparación de los soldados» y en una «falta de supervisión»). Efectivamente, actos tan repetidos y de tal gravedad sólo pueden provenir de un fallo de los mandos.

Pero —o porque así se lo imponían los límites de su misión o por el espíritu jerárquico propio de todo ejército—, este mismo general situaba tal fracaso de liderazgo «del mando de la brigada hacia abajo». Ahora bien, no es posible aislar los hechos que dicho informe denuncia del contexto político-militar más amplio en el que se está desarrollando esta segunda guerra de Irak. El «fracaso de liderazgo» tuvo ya su raíz en la decisión del presidente Bush de hacer la guerra al margen de la legalidad internacional.

Si este editorial sólo trata de los graves abusos del Ejército norteamericano, no ignora sin embargo los anteriores del régimen de Sadam Husein (no suficientemente criticados por la opinión árabe) ni la brutalidad de los atentados ciegos de la actual resistencia iraquí. El Próximo Oriente no se encontraría en la grave situación que hoy atraviesa si sus líderes políticos hubieran dado mayores pruebas de coraje, visión política, y respeto de los derechos humanos.

Guantánamo, Afganistán y Bagdad

Las torturas sistemáticas a los prisioneros de guerra no empezaron en la prisión bagdadí de Abu Ghraib. La forma de vejación consistente en fotografiar a prisioneros desnudos se practicó ya en Afganistán; esto, según el periodista norteamericano, premio Pulitzer, S. Hersh (que se basa en otro informe del general Taguba), *«no era algo arbitrario, sino que formaba parte de un proceso deshumanizador de los interrogatorios»*.

Los prisioneros de Afganistán fueron trasladados al limbo legal de la base norteamericana de Guantánamo con la evidente finalidad de privarlos de cualquier derecho. Así lo indica el mismo nombre con el que los designa la autoridad militar estadounidense: *«combatientes enemigos ilegales»*. Su vida allí es una continua tortura: es tortura, para empezar, la no comunicación de los cargos por los que están detenidos, además de las condiciones materiales y psicológicas de su encierro. Por si todo ello no bastara, los militares norteamericanos utilizan allí un manual que incluye hasta 20 técnicas de tortura, autorizadas expresamente por el Pentágono. Según R. Mc Namara, jefe que fue del Pentágono durante buena parte de la guerra de Vietnam, la situación en Guantánamo *«puede ser aún peor»* que la de los presos de Abu Ghraib.

Ya desde el comienzo de la invasión de Irak, la Cruz Roja había denunciado torturas generalizadas. Pero el Departamento de Defensa logró controlar durante meses esta información. Hasta que las increíbles fotografías tomadas por los mismos agentes de la policía militar revelaron al mundo las repugnantes bajas que se estaban cometiendo en las prisiones de Irak. Estados Unidos había perdido la guerra de Vietnam en las pantallas de televisión más que en los campos

de batalla; de ahí el empeño, esta vez, por impedir que ciertas imágenes –como los féretros que transportaban los soldados muertos en Irak– llegaran a la opinión norteamericana. Ahora han sido las cámaras digitales y los correos electrónicos los que han hecho saltar por los aires las barreras puestas a la información. Una vez más, la maquinaria de guerra más poderosa de todos los tiempos va camino de quedar paralizada por los medios de comunicación y por la tozuda fuerza de unos hechos que tienen que ver con la legalidad y la dignidad humana.

Según un informe del general D. Ryder, oficial en jefe de asuntos internos del Ejército de EE UU, la policía militar trataba de «establecer condiciones favorables para posteriores entrevistas» con los prisioneros, un eufemismo que significa «quebrar su voluntad». Como torturas más empleadas, el informe del general Taguba citaba: derramar sobre los detenidos el líquido fosfórico de las linternas químicas, golpearlos (en alguna ocasión, hasta la muerte), amenazarlos con ser sodomizados o sodomizarlos de hecho, azuzar perros contra ellos, obligarles a adoptar, desnudos, posturas humillantes, etc. Las correspondientes imágenes de esas torturas –o parte de ellas– han llegado con posterioridad a conocimiento de la opinión mundial: un preso encapuchado y mantenido en pie con cables eléctricos en pies y manos, otro esposado a una barandilla y desmayado, humillaciones sexuales de una bajeza increíble, dejar en las letrinas la comida de los encarcelados, obligarlos a comer carne de cerdo, beber alcohol o hablar mal del islam, etc. «Es aterrador, peor de lo que había imaginado», manifestaba un congresista norteamericano. A lo que hay que añadir 37 prisioneros (32 en Irak y 5 en Afganistán) muertos en prisión, entre ellos un general iraquí fallecido «por asfixia, debido a una sofocante presión en el pecho» mientras era interrogado, otros por «múltiples heridas de bala», «estrangulamiento», «embolia pulmonar», etc. Ocho de estas muertes, según un testigo, habrían sido «clasificadas por las autoridades médicas como homicidios».

Que ningún responsable pensara en la inevitable repercusión que semejantes actos de barbarie, aun sin su posterior difusión masiva, deberían tener en el pueblo iraquí invadido y en una cultura como la del Próximo Oriente hace pensar que debían estar cegados por la situación de impunidad en que se movían. Los oficiales del servicio de

inteligencia no dudaban en «felicitar a los soldados por el empleo de estos métodos, gracias a los cuales están consiguiendo información».

No se trata ahora de aprovechar estas turbias revelaciones para una exhibición de escándalo farisaico a costa de norteamericanos y británicos, ya que el problema de la tortura afecta, según *Amnistía Internacional*, a 106 Estados, entre los que se encuentran España y Francia. Pero la brutalidad de las fotografías y de los testimonios que hasta la fecha han llegado de Irak nos obliga a sospechar que este paroxismo de sádico desprecio de la dignidad humana puede constituir un síntoma de grave erosión de los valores sobre los que Occidente pretende construir sus propias sociedades y el orden internacional.

Mercenarios e inteligencia militar

El empleo de mercenarios en la ejecución de las torturas, lejos de disminuir las responsabilidades, parece aumentarlas. Unos 20.000 de tales mercenarios habrían sido contratados para la actual campaña de Irak. Estos civiles armados no son responsables ante la ley militar estadounidense; además, se les ha garantizado la exención de cualquier futura jurisdicción iraquí. Su presencia constituye un intento –aunque parcial– de privatizar la guerra (exactamente en la dirección contraria de la humanización que pretende conseguir el Derecho de Guerra), un intento de colocar fuera del alcance de la ley internacional a estos «soldados sin bandera». Las así llamadas «empresas de servicios militares» (PMF, en sus siglas inglesas) no se encuentran reguladas por ninguna normativa internacional. El principal impulsor del empleo de estos mercenarios fue Dick Cheney, actual vicepresidente de los EE UU, cuando en 1992 dirigía el ministerio de Defensa. Siguiendo sus planes, el Ejército de EE UU ha pasado de 2,1 millones a 1,4 de efectivos. Las PMF realizan hoy en los EE UU una cifra de negocios de más de 100.000 millones de dólares, destacando entre ellas *Halliburton* y sus subsidiarias, empresas que D. Cheney administró desde 1994 hasta su ascensión a la vicepresidencia.

Siguiendo esta lógica de privatización de la guerra, el Pentágono, impaciente por las pocas informaciones que la policía militar obtenía de

los prisioneros, decidió que había llegado el momento de «subcontratar» los interrogatorios, traspasándolos –al menos en parte– a los mercenarios, y de «*guantanamoizar*» las cárceles de Irak. Los interrogatorios deberían ser en adelante más agresivos, y más frecuente y rápido el empleo en las cárceles de las armas de fuego, a pesar de que la Cruz Roja ya había denunciado que entre mayo y noviembre del año anterior 23 detenidos habían sido tiroteados en Abu Gharib y otras dos prisiones de Irak (no es de extrañar que la tropa llegara, de esta manera, a la conclusión de que humillar a los iraquíes capturados era parte del trabajo que se les pedía).

A este efecto, a fines de abril 2004 fue nombrado director de todas las prisiones de EE UU en Irak el general G. Millar, que hasta entonces había estado al frente del centro de detenidos de Guantánamo, en sustitución de la generala Janis Karpinski, que se había resistido a ceder el control de las prisiones a la inteligencia militar. Hoy esta generala es el único mando procesado por haber tolerado los abusos mundialmente conocidos. Durante el mandato de la generala J. Karpinski, era la inteligencia militar la que tenía el control de los interrogatorios, según declaró el general Taguba ante el Senado; las palabras más duras de este general fueron para dicho cuerpo y para los mercenarios. Sin embargo, los soldados se defienden siempre alegando que no hacían sino cumplir órdenes (la misma respuesta utilizada hace 60 años, cuando fueron juzgados los responsables del horror nazi).

Crímenes de guerra

El *Comité Internacional de la Cruz Roja* (CICR) había denunciado casos de maltrato a prisioneros desde el comienzo de la invasión. Todos esos meses de advertencias oficiales fueron olímpicamente ignorados por los jefes políticos y militares norteamericanos. En febrero del presente año, el CICR hizo entrega a los EE UU de un informe confidencial para el que había estado investigando de marzo a noviembre del año anterior. Según dicho informe, las torturas no eran algo esporádico sino que estaban «*toleradas*».

La *Convención de Ginebra*, firmada en 1949 por Estados Unidos, entre otros países, prohíbe expresamente, en su artículo 3, el trato cruel y la tortura contra los prisioneros de guerra, así como humillarlos o darles un trato degradante; en el artículo 4 se especifica que las personas protegidas por esta Convención son aquellas que se encuentran envueltas en un conflicto armado o sometidas a ocupación por una fuerza extranjera. El mismo Ejército de los EE UU se acogió a esta Convención cuando recordó, de manera preventiva al iniciar la invasión de Irak, que ésta prohíbe la exposición pública de presos de guerra, situación en la que podían encontrarse sus soldados. Por ello, la ministra suiza de Exteriores se creyó en la obligación de convocar, en su calidad de representante del «país depositario de la Convención de Ginebra», a los embajadores de Estados Unidos y Reino Unido para recordarles que debían respetar los pactos internacionales. En la conferencia de prensa posterior llegó a manifestar que había sentido «rabia» y «asco» por el trato infligido a los presos iraquíes.

Pero los abogados del Pentágono, según un prestigioso diario neoyorkino, respondieron a la Cruz Roja que los presos iraquíes no estaban cualificados para ser amparados por la Convención de Ginebra. Con otras palabras, la culpa de que el Ejército norteamericano no haya respetado el derecho internacional la tienen las víctimas iraquíes, que no son dignas de disfrutar de tal derecho. Al mismo tiempo, la Administración Bush pretende exigir que sus soldados gocen de total inmunidad ante el Tribunal Penal Internacional. Lo cual equivale a enviar a los terroristas un mensaje muy claro: no merece la pena luchar con las armas de la razón por el reconocimiento de los derechos, no hay más salida que el empleo de la fuerza bruta, del terrorismo.

¿Quién se hace responsable?

En los primeros días de mayo, el jefe de estado mayor no había leído aún el abrumador informe que el general Taguba le había remitido a fines de febrero, tal vez porque su entorno no lo consideró importante. De esa manera, se mantuvo al presidente Bush y al Congreso en la ignorancia de los hechos. Este grave fallo se sitúa manifiestamente por encima «del mando de la brigada». Así parece probarlo también el

testimonio del comandante de la policía militar Donald J. Reese, quien asegura que el jefe de las tropas de ocupación en Irak, el general Ricardo Sánchez, no sólo estaba al tanto de lo que ocurría, sino que incluso presenció algunos de los abusos posteriormente denunciados.

Ante el Senado norteamericano, Donald Rumsfeld asumió *«la completa responsabilidad»* de todo lo ocurrido, y reconoció: *«estos actos ocurrieron bajo mi mando. Como secretario de Defensa, soy responsable de ellos»*. Confesó también su fracaso al no darse cuenta de la gravedad de los hechos y no transmitirlo así a la Casa Blanca y al Congreso. Y anunció que las víctimas de malos tratos recibirían una indemnización. Eso fue todo. Ni presentó su dimisión, aunque se la exigieron políticos demócratas y republicanos, ni se la pidió el presidente Bush. Además, se atrevió a declarar, por una parte, que las técnicas de los interrogatorios eran legales y, por otra, que *«los culpables serán castigados»*. Anunciar el castigo de unos subordinados de bajo rango a los que se ha empujado a cometer los crímenes que se denuncian sólo puede ser calificado de ejercicio de puro cinismo.

El presidente Bush añadiría una pirueta más a esta patética exhibición de cinismo cuando se limitó a censurar en privado a Rumsfeld por no haberle informado, mientras en público calificaba su actuación de *«trabajo soberbio»*. Los observadores interpretaron que no quiso entregar la cabeza de Rumsfeld porque ello habría supuesto conceder un tanto decisivo al candidato demócrata en vísperas de las elecciones presidenciales. El interés electoral –y los demás intereses unidos a él– primaron una vez más sobre el deber moral ante la nación y la humanidad.

La responsabilidad de las torturas recaía, de esa manera, sobre el presidente mismo, puesto que éste no se la exigía a su secretario de Defensa. Además, él mismo las había provocado cuando lanzó a su Ejército a una guerra ilegal y permitió la presencia en él de unos cuerpos que actúan al margen de la legalidad internacional. El crédito del presidente ha quedado arruinado. ¿Cómo conseguirá ahora persuadir a iraquíes y musulmanes de las buenas intenciones de Washington? Y ¿cómo convencerá a nuevos aliados para que participen bajo mando norteamericano en el proceso de pacificación de Irak?

En este momento, todas las miradas convergen hacia el presidente de los EE UU. Y hacia la totalidad de su primer mandato presidencial, centrado desde un principio en Irak y su petróleo, según están poniendo de manifiesto las revelaciones de sus antiguos colaboradores y los mismos hechos. Richard Clarke, ex jefe antiterrorista de EE UU, intentó durante meses que se tomaran medidas para evitar los atentados del 11-S: *«en cuarenta ocasiones diferentes, la CIA aportó al presidente Bush información de que Al Qaeda preparaba un ataque en EE UU»*, pero Bush, según el mismo Clarke, *«quería que el autor de los atentados fuera Sadam Husein. Era la excusa para cargarse al régimen iraquí. Al invadir Irak, Bush desvió la lucha contra el terror»*.

Bush lleva camino de no conseguir ninguno de sus objetivos. El escándalo de las torturas no ha hecho sino revelar el *«fracaso de su liderazgo»*. Se imaginó que llegaría más lejos abandonando el camino exigente de la legalidad y los derechos humanos. Pero la guerra de Irak tiene más probabilidades de terminar en un segundo Vietnam que en el paseo triunfal que preveía. Le va a ser muy difícil conseguir que el petróleo iraquí forme parte del negocio americano y contribuya a que los estadounidenses dispongan de un carburante más abundante y barato. Es previsible que, en los próximos años, Irak y el conjunto del Próximo Oriente se distancien aún más de EE UU. El terrorismo internacional, lejos de quedar debilitado, saldrá reforzado de esta guerra absurda. Y la inseguridad ha aumentado, tanto en los EE UU como en Europa (en España lo hemos comprobado trágicamente) y en los países árabes o musulmanes. La imagen de los EE UU, líder de Occidente y propagadora de la democracia, ha quedado notablemente deteriorada. El supremo responsable de este grave deterioro de la situación no es otro que este presidente, capaz, entre otras cosas, de hacer chirigota de su propia búsqueda de falsas razones para lanzar la invasión de Irak. El gran pueblo norteamericano, que, bien dirigido, ha sabido, en más de una ocasión, demostrar su humanidad y su solidaridad con otros pueblos, será capaz de dictar, el próximo mes de noviembre, el veredicto que se merece este mediocre estadista, llegado al poder de manera dudosamente legal, y excesivamente atento a los intereses de ciertas empresas norteamericanas. ■